

Señores

JUZGADO PRIMERO (01º) CIVIL DEL CIRCUITO DE TURBO

icctoturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL
DEMANDANTES: ANSELMA MARÍA GENEZ DELGADO Y OTROS.
DEMANDADOS: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Y OTROS
RADICADO: 058373103001-2024 00025-00

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.**, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. identificada con NIT 860.028.415-5, representada legalmente por **NÉSTOR RAÚL HERNÁNDEZ OSPINA**, y con dirección de notificaciones judiciales al correo notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** instaurada por Anselma María Genez Delgado, Yuris Yohanna Pérez Hernández y Ketty Yojanna Pérez Hernández en contra de La Equidad Seguros Generales O.C., COOINTUR y Diego Raúl Primera Santos, y acto seguido procedo a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** promovido por COOINTUR en contra de mi mandante, anunciando desde ahora que me opongo a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda y el llamamiento, de conformidad con las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:

CAPITULO I.
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Contestación a los hechos de la demanda denominados “relacionados con la parte demandante”:

Frente al hecho “PRIMERO”: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- Es cierto que el escrito de demanda vincula en calidad en demandados a La Equidad Seguros

Generales O.C., Coointur y al señor Diego Raúl Primera.

- No es cierto que los hechos acontecidos el 07 de julio de 2023 constituyen en tipo penal de “homicidio culposo” puesto que a la fecha no se ha proferido sentencia penal ejecutoriada que declare la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable atribuida al extremo pasivo del litigio.
- Si bien es cierto que se vinculó a la Equidad Seguros Generales O.C. en calidad de demandada directa, ha de precisarse que mi prohijada actúa como compañía aseguradora del vehículo de placas UIE-065, es decir, no funge como garante de las obligaciones del asegurado, luego entonces la eventual obligación indemnizatoria que le asiste está condicionada a que se acrediten los presupuestos del artículo 1077 del Código de Comercio y se limitará hasta la suma asegurada.

Contestación a los hechos de la demanda denominados “relacionados con la responsabilidad civil contractual”:

Frente al hecho “SEGUNDO”: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

Frente al hecho “TERCERO”: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado. No obstante, se pone de presente que en el plenario no milita prueba alguna que acredite que el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) pagó el costo del pasaje aducido.
- A mi representada no le consta que la ruta asignada para el vehículo de placas UIE-065 comprendía el recorrido de Arboletes (Antioquia) al Corregimiento de la Candelaria, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. No obstante, en caso de probarse que el vehículo no se encontraba transitando por la ruta destinada por la empresa de transportes, se estaría ante la configuración de una causal de exclusión pactada en la Póliza No. AA031299 suscrita por mi representada. Véase:

1.1 EXCLUSIONES PARA TODAS LAS COBERTURAS

¿Qué no cubre?

La Equidad quedará exonerada de toda responsabilidad cuando se presente una o varias de las siguientes causales:

(...)

- **Cuando el vehículo no se encuentre prestando el servicio en la ruta destinada por parte de la empresa transportadora.**

Fotografía: Condiciones Generales de la Póliza No. AA031299

Frente al hecho “CUARTO”: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta de manera directa que el día 07 de julio de 2023 tuvo lugar el deceso del señor Alberto Pérez Hernández (QDEP) con ocasión al accidente de tránsito en el que supuestamente intervino el vehículo de placas UIE-065, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado.
- Es cierto que el vehículo de placas UIE-065 se encuentra amparado por el contrato de seguro contentivo en la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. AA031299 suscrita por La Equidad Seguros Generales O.C. Sin embargo, es menester resaltar que, el surgimiento de cualquier obligación en el asunto se encuentra condicionada a que se pruebe: (i) la estructuración de la responsabilidad civil que se pretende atribuir en cabeza de la parte demandada; (ii) que la reclamación se hubiese realizado dentro de la vigencia de la póliza y los hechos ocurran dentro de su vigencia, y; (iii) que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro. Solo de llegarse a cumplir los requisitos expuestos de manera concurrente, habría lugar a una obligación indemnizatoria en cabeza de mi amparada.
- Es cierto que la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. AA031299 presta cobertura material para los amparos referidos por el apoderado de la parte actora. No obstante, debe precisarse que el valor asegurado por persona asciende a la suma de 60 salarios mínimos, tal como se avizora a continuación:

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD	APARTADO
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
LOCALIDAD	CALLE 91 # 96A -27
DIRECCION	CALLE 91 # 96A -27
TIPO DE VEHICULO	CAMPEROS / CAMIONETAS
V/ASEGURADO POR PUESTO/PERSONA	60 SMMLV
CAPACIDAD DE PASAJEROS	10.00
PLACA UNICA	UIE065
CANAL DE VENTA	Directo

Fotografía: Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. AA031299

Frente al hecho “QUINTO”: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta que la ruta asignada para el vehículo de placas UIE-065 comprendía el recorrido de Arboletes (Antioquia) al Corregimiento de la Candelaria, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. No obstante, en caso de probarse que el vehículo no se encontraba transitando por la ruta destinada por la empresa de transportes, se estaría ante la configuración de una causal de exclusión pactada en la Póliza No. AA031299 suscrita por mi representada. Véase:

1.1 EXCLUSIONES PARA TODAS LAS COBERTURAS

¿Qué no cubre?

La Equidad quedará exonerada de toda responsabilidad cuando se presente una o varias de las siguientes causales:

(...)

- **Cuando el vehículo no se encuentre prestando el servicio en la ruta destinada por parte de la empresa transportadora.**

Fotografía: Condiciones Generales de la Póliza No. AA031299

- A mi representada no le consta la calidad de propietario y conductor del vehículo de placas UIE-065 para la fecha de los hechos que originaron el presente litigio, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

Frente al hecho “SEXTO”: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada

una de ellas de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado. No obstante, se pone de presente que en el plenario no milita prueba alguna que acredite que el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) pagó el costo del pasaje aducido y, en consecuencia, ostentaba la calidad de pasajero.
- A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado respecto de las circunstancias de tiempo y lugar del accidente de tránsito, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado.

Frente al hecho “SÉPTIMO”: No es cierto y no puede probarse por parte de la parte demandante que el accidente se produjo por la falta de deber de cuidado atribuible al conductor del vehículo, en la medida a que al plenario no se adjuntan elementos de prueba que endilguen dichas características para imputar responsabilidad, por lo que, de quererlo demostrar, la parte activa deberá aportar pruebas conducentes, pertinentes y útiles que cumplan con los parámetros de la carga probatoria del artículo 167 del C.G.P. En relación a ello, es necesario resaltar que, el apoderado judicial de la parte demandante hace referencia a las condiciones del terreno en el que se produjo el supuesto accidente, sin embargo, conforme al Informe Ejecutivo- FPJ-3 elaborado por el Inspector de Policía Carlos Mario Vargas Mercado, se evidencia que no se realizó una inspección presencial del terreno. Véase:

TECNOLOGICOS, NO SE REALIZA LA FILIACION FOTOGRAFICA Y TOPOGRAFICA SOLO SE UTILIZA COMO REFERENCIALAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, LA VIA ES CONTINUA EN SEMIRECTA SOBRE UNA PENDIENTE.

Fotografía: Informe Ejecutivo- FPJ-3 allegado con el escrito de demanda. P.75

Frente al hecho “OCTAVO”: A mi representada no le consta que se haya instaurado denuncia con ocasión a los hechos acontecidos el 07 de julio de 2023 pues es un hecho que escapa de su órbita de actuación en calidad de compañía de seguros. Sin perjuicio de lo anterior, se itera que a la fecha no se ha proferido sentencia penal ejecutoriada que declare la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable atribuida al extremo pasivo del litigio.

Frente al hecho “NOVENO”: A mi representada no le consta que hogar el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) estuviese conformado por las aquí demandantes, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en su calidad de aseguradora. Adicionalmente, se resalta que en el plenario no obran medios de prueba pertinentes, útiles y conducentes para acreditar el vínculo afectivo que se aduce.

Frente al hecho “DÉCIMO”: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- No le asiste razón al vocero judicial de los demandantes en afirmar que el deceso del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) tuvo como causa el tipo penal de homicidio culposo puesto que a la fecha no se ha proferido sentencia penal ejecutoriada que declare la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable atribuida al extremo pasivo del litigio.
- A mi representada no le consta que la señora Anselma María Genez Delgado ostentaba la calidad de compañera permanente del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) toda vez que no se aportó documento proferido por juez o notario que reconozca la unión marital de hecho que se aduce existió entre la aquí demandante y el occiso. Sobre el particular, de manera preliminar se manifiesta que se solicitará la comparecencia de los señores Miguel Enrique Argumedo Carvajal y Diomedes Dionicio Díaz Berrío, por lo tanto la declaración extrajuicio que rindieron ante la Notaría única del Círculo de Arboletes y que se aportó con el libelo de demanda carece de valor probatorio hasta que se rinda la ratificación.
- A mi representada no le consta la aflicción sufrida por las aquí demandantes con ocasión al deceso del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD), máxime cuando su apoderado judicial afirma que las señoras Anselma Maria Genez, Yuris Pérez Hernández y Ketty Yojanna Pérez padecen depresión sin aportar documentación que sustenten lo aducido.

Frente al hecho “DÉCIMO PRIMERO”: A mi mandante no le consta lo relacionado con los presuntos perjuicios sufridos por las demandantes derivados de las lesiones causadas al señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) dado que, obedece a aspectos desconocidos por mi representada y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P acreditando lo afirmado a través de la prueba que resulte conducente, pertinente y útil.

Frente al hecho “DÉCIMO SEGUNDO”: A mi mandante no le consta lo relacionado con la capacidad económica de las demandantes derivada de las lesiones causadas al señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) dado que obedece a aspectos desconocidos por mi representada y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P acreditando lo afirmado a través de la prueba que resulte conducente, pertinente y útil.

Frente al hecho “DÉCIMO TERCERO”: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- Según se constata en la documentación allegada con el escrito de demanda es cierto que las señoras Anselma Maria Genez, Yuris Pérez Hernández y Ketty Yojanna Pérez concedieron poder

a los doctores Jorge Luis Vergara Márquez y Laura Victoria Hoyos Humanéz para adelantar el trámite procesal que aquí se ventila.

- A mi representada no le consta que la señora Anselma María Genez Delgado ostentaba la calidad de compañera permanente del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) toda vez que no se aportó documento proferido por juez o notario que reconozca la unión marital de hecho que se aduce existió entre la aquí demandante y el occiso. Sobre el particular, de manera preliminar se manifiesta que se solicitará la comparecencia de los señores Miguel Enrique Argumedo Carvajal y Diomedes Dionicio Díaz Berrío, por lo tanto la declaración extrajudicial que rindieron ante la Notaría única del Círculo de Arboletes y que se aportó con el libelo de demanda carece de valor probatorio hasta que se rinda la ratificación.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, en la medida en que no se reúnen los supuestos esenciales para que se estructure la Responsabilidad Civil Contractual. De esta manera, y con el ánimo de lograr una indudable precisión frente a los improbados requerimientos pretendidos en la demanda, me referiré a cada pretensión de la siguiente manera:

Frente a la pretensión “PRIMERA”: **ME OPONGO** a la prosperidad de la pretensión de declarar civilmente, solidaria y contractualmente responsable al extremo pasivo del litigio en atención a que al interior del expediente no obran elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de responsabilidad de los supuestos daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante derivados del accidente de tránsito acontecido el 07 de julio de 2022. Contrario a lo pretendido por la parte accionante en el asunto, es plausible que en el caso el Despacho exima de responsabilidad alguna los demandados debido a que (i) no se encuentra acreditada la calidad de pasajero del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) y, en sentido, no es aplicable el régimen de responsabilidad civil contractual, (ii) no se encuentran acreditados los presupuestos axiales de la responsabilidad civil puesto que los medios probatorios allegados por el extremo actor carecen de virtualidad para la declaratoria de responsabilidad debido a que, por un lado, el IPAT no está debidamente diligenciado al no formular hipótesis alguna sobre la circunstancia de modo, tiempo y lugar del supuesto accidente y, por el otro, tampoco ha culminado la investigación penal adelantada con ocasión a los acontecimientos del 07 de julio de 2023, por lo tanto no se encuentra probado la existencia de un hecho dañoso y (ii) en el acervo probatorio no se observa medios que acrediten la existencia y cuantía de los perjuicios afirman padecer las aquí demandantes, tal como se precisará en líneas posteriores.

Adicionalmente, **ME OPONGO** a la prosperidad la pretensión de condenar solidariamente a La Equidad Seguros Generales O.C. por concepto de las sumas reconocidas en la sentencia, en atención a que al

interior del expediente no obran elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de responsabilidad de los supuestos daños y perjuicios ocasionados a la demandante derivados del accidente de tránsito acontecido el 07 de julio de 2022, y de tal suerte, tampoco existe la obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada, por la no demostración de los presupuestos del Art. 1077 del C. Co. En efecto, en el caso objeto de estudio (i) no se ha demostrado fehacientemente la responsabilidad civil del asegurado, siendo este el siniestro amparado por la Póliza vinculada y (ii) tampoco se cumplió con la carga de acreditar la cuantía pretendida por cuanto las demandantes se limitan a estimar los perjuicios sin aportar prueba de su existencia. Adicionalmente, se itera que mi prohijada en su calidad de compañía aseguradora no actúa como garante de las obligaciones del asegurado.

Frente a la pretensión “SEGUNDA”: ME OPONGO a la prosperidad de la pretensión de declarar civilmente, solidaria y contractualmente responsable al extremo pasivo del litigio en atención a que al interior del expediente no obran elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de responsabilidad de los supuestos daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante derivados del accidente de tránsito acontecido el 07 de julio de 2022. Contrario a lo pretendido por la parte accionante en el asunto, es plausible que en el caso el Despacho exima de responsabilidad alguna los demandados debido a que (i) no se encuentra acreditada la calidad de pasajero del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) y, en sentido, no es aplicable el régimen de responsabilidad civil contractual, (ii) no se encuentran acreditados los presupuestos axiales de la responsabilidad civil puesto que los medios probatorios allegados por el extremo actor carecer de virtualidad para la declaratoria de responsabilidad debido a que, por un lado, el IPAT no está debidamente diligenciado al no formular hipótesis alguna sobre la circunstancia de modo, tiempo y lugar del supuesto accidente y, por el otro, tampoco ha culminado la investigación penal adelantada con ocasión a los acontecimientos del 07 de julio de 2023, por lo tanto no se encuentra probado la existencia de un hecho dañoso y (ii) en el acervo probatorio no se observa medios que acrediten la existencia y cuantía de los perjuicios afirman padecer las aquí demandantes, tal como se precisará en líneas posteriores.

Adicionalmente, **ME OPONGO** a la prosperidad la pretensión de condenar solidariamente a La Equidad Seguros Generales O.C. por concepto de las sumas reconocidas en la sentencia, en atención a que al interior del expediente no obran elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de responsabilidad de los supuestos daños y perjuicios ocasionados a la demandante derivados del accidente de tránsito acontecido el 07 de julio de 2022, y de tal suerte, tampoco existe la obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada, por la no demostración de los presupuestos del Art. 1077 del C. Co. En efecto, en el caso objeto de estudio (i) no se ha demostrado fehacientemente la responsabilidad civil del asegurado, siendo este el siniestro amparado por la Póliza vinculada y (ii) tampoco se cumplió con la carga de acreditar la cuantía pretendida por cuanto las demandantes se limitan a estimar los perjuicios sin aportar prueba de su existencia. En todo caso, ante el remoto y eventual caso de llegarse a condenar a la pasiva, la obligación indemnizatoria a cargo de mi

representada se sujetará al límite pactado, es decir, 60 SMLMV. Adicionalmente, se itera que mi prohijada en su calidad de compañía aseguradora no actúa como garante de las obligaciones del asegurado.

Finalmente, no puede declararse la solidaridad en cabeza de mi mandante, toda vez que esta surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen y, en el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Frente a la pretensión “TERCERA”: **ME OPONGO** a la prosperidad de declarar la materialización del riesgo amparado en la Póliza de Responsabilidad Contractual No. AA031299 expedida por La Equidad Seguros Generales O.C., toda vez que (i) no se encuentra acreditada la calidad de pasajero del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) y, en sentido, no es aplicable el régimen de responsabilidad civil contractual, (ii) no se ha demostrado fehacientemente la responsabilidad civil del asegurado, siendo este el siniestro amparado por la Póliza vinculada y (iii) tampoco se cumplió con la carga de acreditar la cuantía pretendida por cuanto las demandantes se limitan a estimar los perjuicios sin aportar prueba de su existencia. En todo caso, ante el remoto y eventual caso de llegarse a condenar a la pasiva, la obligación indemnizatoria a cargo de mi representada se sujetará al límite pactado, es decir, 60 SMLMV.

Frente a la pretensión “CUARTA”: **ME OPONGO** a la prosperidad de condenar a la pasiva al pago de los perjuicios pretendidos toda vez que (i) no se encuentra acreditada la calidad de pasajero del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) y, en sentido, no es aplicable el régimen de responsabilidad civil contractual, (ii) no se ha demostrado fehacientemente la responsabilidad civil del asegurado, siendo este el siniestro amparado por la Póliza vinculada, (iii) tampoco se cumplió con la carga de acreditar la cuantía pretendida por cuanto las demandantes se limitan a estimar los perjuicios sin aportar prueba de su existencia y (iv) ante el remoto y eventual caso de llegarse a condenar a la pasiva, la obligación indemnizatoria a cargo de mi representada se sujetará al límite pactado, es decir, 60 SMLMV. Ahora bien, sumado a lo anterior, procederé a pronunciarme en relación con cada perjuicio solicitado, de la siguiente manera:

- **Frente a los perjuicios morales:** **ME OPONGO** a la prosperidad de la pretensión de condenar al pago de perjuicios por concepto de perjuicios morales, por cuanto, además de la inexistente responsabilidad, en este caso, no obra en el plenario prueba sobre congoja causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 07 de julio de 2023 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales. En adición, tampoco se encuentra probada la Unión Marital de Hecho que se afirma existió entre la señora Anselma María Genéz Delgado y el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD).
- **Frente al daño a la vida de relación:** **ME OPONGO** a la prosperidad de la pretensión de condenar

al pago de perjuicios por concepto de daño en la vida de relación, por cuanto, (i) es una tipología de perjuicio que se reconoce exclusivamente en favor de la víctima, por lo que las demandantes carecen de legitimada para reclamar su pago, (ii) no obra en el plenario prueba sobre alteración en la cotidianidad causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 07 de julio de 2023 y (iii) los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.

Frente a la pretensión “TERCERA” (enunciada erróneamente en el libelo de demanda): ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. La corrección monetaria sólo se generaría en una eventual condena en contra de mi representada. Sin embargo, se itera que mi representada no tiene ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor y en el remoto caso en que se profiera sentencia condenatoria, se ha de tener en cuenta que los intereses moratorios llevan implícitamente la actualización monetaria.

Frente a la pretensión “CUARTA”: **ME OPONGO** a la prosperidad de esta petición de condena en costas y agencias en derecho, toda vez que es una pretensión consecuencial a la declaración de responsabilidad de los demandados, pedimento que no tienen vocación de prosperidad.

III. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

EXCEPCIONES FRENTE A LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A LA PASIVA

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL – EL IPAT Y LA DENUNCIA NO SON MEDIO DE PRUEBA FEHACIENTE

Se formula esta excepción por cuanto en el presente proceso es claro que el único medio probatorio con el cual la parte demandante pretende probar la responsabilidad civil del conductor del vehículo de placas UIE 065 es la denuncia de accidente de tránsito, documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil, máxime cuando a la fecha no ha concluido la investigación penal. En adición, el IPAT allegado tampoco acredita de manera irrefutable la dinámica del accidente de tránsito, por lo cual, se permite concluir que la accionante no cumple con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, pues no acreditaron mediante elementos de convicción suficiente la responsabilidad que pretenden imputar.

Las pretensiones carecen de fundamento, especialmente porque no existe ningún tipo de obligación en cabeza de los demandados, y por ende de mi representada, ya que en la esfera de la responsabilidad civil implorada no se constituyen los elementos necesarios para que la misma sea predicada (vínculo concreto, inejecución o ejecución retardada o defectuosa – incumplimiento culposo- y daño), pues en el caso que nos ocupa, de haberse presentado algún tipo de perjuicio, este se deriva de hechos en los que ninguna injerencia tuvo el demandado y por ende, como a él se le trata de endilgar una responsabilidad Civil Contractual, hay que señalar que es inexistente nexo alguno de causalidad que permita edificar semejante cargo.

Es ajustado mencionar en este punto que, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia ha indicado que, para ser posible la atribución de responsabilidad civil por un incumplimiento contractual, es indispensable la concurrencia de unos elementos sine qua non, los cuales deben acreditarse irrefutablemente, luego que, cuando este no está debidamente demostrado, se convierte en una circunstancia que imposibilita de soslayo la atribución de responsabilidad. En este tenor, los requisitos que ha determinado la H. Corte son:

“(…) Consecuente con esto, se ha dicho de manera reiterada por esta Corporación que, para la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual estará llamado el demandante a acreditar la existencia de los siguientes supuestos: «i) que exista un vínculo concreto entre quien como demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquél que, señalado como demandado, es la persona a quien dicha conducta se le imputa (existencia de un contrato); ii) que esta última consista en la inejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de la ley o por disposición convencional es parte integrante del ameritado vínculo (incumplimiento culposo),iii) y en fin, que el daño cuya reparación económica se exige consista, básicamente, en la privación injusta de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho (daño) de no mediar la relación tantas veces mencionada (relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño)» (CSJ SC 380-2018 del 22 de feb. de 2018, Rad. 2005-00368-01) (...)”¹

Teniendo en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la sentencia precitada, sin la confluencia de dichos elementos no puede hablarse de Responsabilidad Civil Contractual, máxime que cuando se dirige el derecho de acción bajo este tipo de responsabilidad se deben demostrar los elementos anteriormente señalados y le corresponde la carga de la prueba a quien demanda, es decir, el extremo actor está en la obligación de probar la existencia estos elementos axiológicos, conforme lo ordena el artículo 167 del Código General del Proceso.

¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil, Sentencia del 03 de diciembre del 2018. Rad. No. 11001-31- 03-020-2006-00497-01. M. P. Dra. Margarita Cabello Blanco.

Así las cosas, dado la parte demandante no logró elucidar de manera clara y precisa cómo el actuar del conductor del vehículo asegurado hubiese sido la causa determinante y eficiente para el perfeccionamiento del perjuicio que exige se le repare, no se logró encontrar probada la existencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil contractual en contra de los demandados, por lo que deberán denegarse las pretensiones.

Descendiendo al caso de marras, es menester señalar que la parte demandante en el presente asunto no acreditó los elementos para la configuración de la responsabilidad civil en cabeza del conductor del vehículo de placas UIE 065 dado que (i) inicialmente no aporta pruebas que permitan colegir que el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) ostentaba la calidad de pasajero, es decir, no se prueba la relación contractual que funda la responsabilidad que se pretende endilgar y (ii) no se encuentra acreditado en el caso de marras la hipótesis comprobable sobre el accidente, máxime cuando en el IPAT no se formuló hipótesis que le atribuyera responsabilidad al conductor del vehículo de placas UIE 065 así como tampoco se ha proferido sentencia penal que declare la existencia de la conducta típica, antijurídica y culpable que pretende atribuir el extremo actor al conductor del vehículo de placas UIE 065.

En conclusión, en el caso sub examine, la parte demandante pretende atribuir responsabilidad exclusivamente con la denuncia instaurada, la cual contiene una mera hipótesis incapaz de demostrar los elementos estructurales de la responsabilidad a cargo de la parte demandada, siendo necesario iterar que el IPAT aportado tampoco representa un medio probatorio pertinente para colegir la responsabilidad civil contractual de la pasiva puesto que dicho documento carece de información que permita esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos acontecidos el 07 de julio de 2023.

2. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR NO ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL

Se formula el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no es dable declarar la responsabilidad civil que pretende endilgar la parte actora toda por cuanto la ausencia de medios probatorios que acrediten el hecho dañoso, necesariamente se traduce en la inexistencia de la inferencia lógica que une la conducta desplegada por la pasiva con el supuesto daño padecido por las demandantes, siendo este último un elemento fundante de la responsabilidad civil.

La relación de causalidad es un requisito sine qua non para declarar la responsabilidad civil de una persona, dado un hecho y un daño. Como acotamos anteriormente, este elemento debe ser acreditado en todo caso por parte del demandante y su omisión conlleva sencillamente al fracaso de las declaraciones y condenas pretendidas.

El estado del arte actual ha acogido la teoría de la causalidad adecuada, la cual indica que un hecho es

causa de una consecuencia cuando la producción de esta le sea atribuible de conformidad con las reglas de la experiencia². En resumidas cuentas, es un estudio de idoneidad del hecho para producir la consecuencia, que en materia de responsabilidad civil hace referencia al daño. La Corte Suprema de Justicia ha acogido esta teoría y la define de la siguiente manera:

“Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil”³

Debe igualmente resaltarse que la jurisprudencia ha utilizado como método para identificar la causa eficiente del daño, **“la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, solo es causa del resultado, aquella conducta que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo, (...) según esta teoría, solo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo. Por lo tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante”⁴**

Así, es manifiesto el examen de causalidad consiste en un estudio de orden fáctico, acerca de la idoneidad de un hecho para ser considerado jurídicamente causal de la producción de un daño, o, en otras palabras, el hecho está sujeto a la verificación material y probatoria de su idoneidad para ser considerado bajo el concepto jurídico de causa.

El referido examen de causalidad, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, para que se posible declarar responsabilidad civil extracontractual es requisito necesario e ineludible que exista y se encuentre probado el nexo causal entre el hecho que se alega y el daño cuya indemnización se solicita. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización. El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización...”. (Se resalta). Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible. [...]”⁵

² Ballesteros J. (2012). Responsabilidad Civil. Parte General Tomo I. Temis. Bogotá Págs. 417 – 418.

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-188. M. P. Ariel Salazar Ramírez.

⁴ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-188. M. P. Ariel Salazar Ramírez.

Para esta etapa procesal no se encuentra probada la existencia de responsabilidad civil que pueda estructurarse e imputarse a los codemandados y consecuentemente, a LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., en razón a que no están acreditadas las circunstancias modales y tempo-especiales del hecho de tránsito. En consecuencia, al no existir criterio material o normativo de imputación del daño a las aquí codemandadas, es forzosa la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

Solicito a señor Juez declarar probada esta excepción.

3. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LA SEÑORA ANSELMA MARÍA GENEZ DELGADO AL NO ACREDITARSE SU CONDICIÓN DE COMPAÑERA PERMANENTE DEL SEÑOR ALBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ (QEPD)

En el caso en marras se configura la falta de legitimación en la causa por activa en atención a que el extremo actor no acredita con prueba suficiente la supuesta unión marital de hecho que existía entre la señora Anselma María Genez Delgado y el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) en el momento de los hechos. Ello por cuanto el único documento que allegan para el efecto es una declaración extrajuicio de fecha 13 de febrero de 2024, mismo que no tiene el valor probatorio suficiente para acreditar lo manifestado por la parte actora. En ese sentido, debe el honorable despacho proceder a declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Genez Delgado por los argumentos expuestos.

La legitimación en la causa ha sido definida ampliamente por la jurisprudencia, como aquella titularidad de los derechos de acción y contradicción. El Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19753, magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez, ha señalado sobre esta categoría jurídica lo siguiente:

“ (...) La legitimación en la causa por activa hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es a quien habilita la ley para actuar procesalmente.

Según lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, la falta de legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las pretensiones de la demanda, sino que configura un presupuesto anterior y necesario para que se pueda proferir sentencia, en el entendido de que, si no se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no podrá acceder a las pretensiones de la demanda. Si bien la falta de legitimación en la causa se constituye en un presupuesto necesario para proferir sentencia, ello no es óbice para que esa circunstancia alegada a manera de excepción pueda ser

*resuelta en esta oportunidad procesal, toda vez que, según los dictados del numeral 6 del artículo 180 del CPACA., en el curso de la audiencia inicial, el juez debe resolver acerca de las excepciones previas y sobre las de falta de legitimación en la causa, cosa juzgada, transacción, conciliación y prescripción extintiva (...)*⁶

Del análisis jurisprudencial señalado y del estudio realizado al acervo probatorio aportado al proceso, se refleja una evidente ausencia de legitimación por activa por parte de la señora Genez Delgado, puesto que en ningún momento se observa prueba que acredite la relación afectiva con el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD), que pretende hacer. En ese orden de ideas, al no existir prueba idónea en el expediente que acredite el matrimonio o la Unión Marital de Hecho entre ella y el mencionado señor, no es procedente el reconocimiento de ningún emolumento a su nombre.

La Ley 979 de 2005 estableció los mecanismos por los cuales se declaran las uniones maritales de hecho, únicos medios idóneos de prueba para acreditar la condición de compañero permanente, en los siguientes términos:

“(...) ARTÍCULO 2o. El artículo 4o. de la Ley 54 de 1990, quedará así: Artículo 4o. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:

- 1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.*
- 2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.*
- 3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia (...)*”

Sin embargo, en este caso, no existe prueba idónea de una unión marital entre la señora Anselma María Genez Delgado y el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) ello por cuanto, tal como menciona la norma, no se allega escritura pública de notario, acta de conciliación suscrita por los sujetos o sentencia judicial, por el contrario, se limita el extremo actor a adjuntar un acta de declaración juramentada, que además tiene fines meramente extraprocesales, para acreditar sus afirmaciones. Dicho lo anterior, no basta con la simple prueba documental declarativa de los intervinientes pues, la jurisprudencia ha sido

⁶ Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 19753. M.P. Mauricio Fajardo Gómez

enfática al señalar que para que exista la unión marital de hecho los supuestos compañeros permanentes debe acreditar tres elementos a saber, comunidad de vida, permanencia y singularidad, tal como se transcribe a continuación:

“(…) Ha sido constante la jurisprudencia al señalar que son elementos para conformación de la unión marital de hecho una comunidad de vida, permanente y singular, de los cuales ha dicho que; (i) la comunidad de vida refiere a esa exteriorización de la voluntad de los integrantes de conformar una familia, manifestado en la convivencia, brindándose respeto, socorro y ayuda mutua, compartiendo metas y asuntos esenciales de la vida, <<(…) esa comunidad de vida debe ser firme, constante y estable, pues lo que el legislador pretende con esta exigencia es relieves que la institución familiar tiene, básicamente, propósitos de durabilidad, de estabilidad y de trascendencia>>, la cual se encuentra integrada por unos elementos <<(…) fácticos, objetivos como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de permanencia, de unidad y la affectio maritalis (…)>> (ii) la permanencia, que refiere a la forma de vida en que una pareja idónea comparte voluntariamente y maritalmente, guiada por un criterio de estabilidad y permanencia, en contraposición de las relaciones esporádicas, temporales u ocasionales y; (iii) la singularidad indica que únicamente puede unir a dos personas idóneas, <<atañe con que sea solo esa sin que exista otra de la misma especie, cuestión que impide sostener que la ley colombiana dejó sueltas las amarras para afloraran en abundancia uniones maritales de hecho(…)”⁷

Es claro entonces que el Alto Tribunal considera de vital importancia que dos sujetos que pretendan alegar la existencia de una unión marital de hecho acrediten la comunidad de vida, la permanencia y la singularidad. En ese sentido, no puede desde ninguna perspectiva aceptar el despacho una mera declaración extrajudicial como prueba de los elementos constitutivos de la unión marital de hecho pues, se estaría aceptando dicha relación legal solo mediante los dichos de los demandantes efectuados ante una notaría. Así pues, no obra al interior del expediente ninguna prueba que acredite que efectivamente la señora Anselma María Genez Delgado y el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) tenían una comunidad de vida, que esta fuera permanente y singular.

Es menester señalar que tratándose de una relación personal que no le consta a mi mandante, la carga de la prueba está en cabeza del extremo actor por lo cual, debía allegar prueba útil, conducente y

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC4361-2018 de 12 de octubre de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco.

pertinente en los términos del artículo 165 del Código General del Proceso que acreditara la relación jurídica que afirman tener. En ese entendido, se evidencia que el material probatorio allegado por los demandantes es deficiente en su cometido de probar la existencia de la unión marital de hecho, por lo tanto, al no acreditarse debe quedar excluido de toda pretensión a la señora Anselma María Genez Delgado.

En conclusión, debido a que el extremo actor no aporta prueba que respalde sus dichos y permita acreditar los elementos de la unión marital de hecho, debe tenerse este hecho como no probado y, por lo tanto, debe declarar el juez que la señora Anselma María Genez Delgado no tiene legitimación en la causa por activa pues no prueba la relación jurídica sustancial de la cual parte su reclamación. Por lo tanto, la señora Anselma María Genez Delgado no está legitimada para ejercer la acción que nos ocupa, por no demostrar la relación afectiva que pretende hacer valer en este proceso. Razón por la cual, no es jurídicamente procedente declarar indemnización alguna a su cargo, por los hechos de este litigio.

4. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LA PARTE DEMANDANTE

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral por una cuantía de cien salarios mínimos para cada una de las demandantes, máxime considerando que no se prueba la calidad de compañera permanente de la señora Anselma María Genez Delgado. Además, las sumas solicitadas superan los baremos que jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia ha establecido para el particular.

Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de la parte activa, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Siendo de recordar que para el reconocimiento de cualquier tipología de perjuicio ha de encontrarse acreditado la existencia y cuantía del daño, circunstancia que no se presenta en el caso que nos ocupa comoquiera que en el plenario no milita prueba alguna que permita colegir la afectación sufrida por las demandantes con ocasión a los hechos del 07 de julio de 2023.

Resulta pertinente recordar que, con relación a la ponderación de los daños morales que pretende la parte actora, si bien la misma se encuentra deferida al recto criterio del fallador, estas deben ser debidamente acreditadas, demostradas y tasadas por quien las pretende, teniendo en cuenta además que, este tipo de perjuicios *“se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan insabibles e inconmensurables”*⁸. Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que se encuentra encaminado a *“reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus*

⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo de 2008, Exp.1997-09327-01.

familiares⁹, con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa. Sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia¹⁰.

Inicialmente, se debe advertir al despacho que existe una desmesurada solicitud de perjuicios morales por la suma total de 300 salarios mínimos (estimados en el escrito genitor en \$348.000.000), lo cual es a todas luces improcedente, puesto que refleja un evidente ánimo especulativo y una errónea tasación de los perjuicios, en tanto que los mismos resultan exorbitantes según los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia. En efecto, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada y en tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

Para ilustrar de forma puntal la manera en que la que Corte Suprema de Justicia ha cuantificado este perjuicio, es preciso traer a colación un caso particular. Así pues, en la sentencia SC 4701 de 2021, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Ordinaria tasó el daño moral padecido por el cónyuge e hijos en \$47.472.181 a causa del fallecimiento en accidente aéreo de su esposo y padre. En un caso similar, se reconoció la suma de \$55.000.000 a título de daño moral para el cónyuge supérstite y los hijos con ocasión de la muerte derivada de un accidente de tránsito¹¹.

Por lo antes expuesto es claro que la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales en cabeza de la parte demandante se encuentra totalmente alejada de los criterios normativos y jurisprudenciales que se han sostenido durante años. Lo anterior, al no encontrarse acreditado, en primer lugar, la responsabilidad en cabeza de los demandados y, en segundo lugar, de forma clara y fehaciente los valores pretendidos, ya que sólo se estipulan unos rubros sin indicación de su procedencia. La doctrina ha establecido, en relación a la naturaleza demostrable de los perjuicios morales, lo siguiente:

*“(...) Los perjuicios morales subjetivados, igual que los materiales, deben aparecer demostrados procesalmente. Si bien su cuantificación económica es imposible, dada la naturaleza misma del daño, **lo cierto es que su intensidad es perfectamente demostrable**. La medicina y la psiquiatría contemporáneas pueden dictaminar casi con exactitud el grado y duración del dolor físico y psíquico(...)”¹². (Negrillas fuera del texto).*

Cabe resaltar que la Corte Suprema de Justicia no ha establecido sus baremos en la unidad de Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes si no que, lo ha hecho en cantidades ciertas que solo varían si la

⁹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004-032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona)

¹⁰ Ídem

¹¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de diciembre de 2020.

¹² Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Prueba de los Perjuicios Morales Subjetivados. Pág. 508.

Corte lo considera necesario en pronunciamientos futuros, así pues, no es pertinente que los demandantes pidan una compensación tasada mediante SMLMV, cuando la jurisprudencia expresamente ha tasado en valores reales y no sujetos a indexación el valor que se otorga si su pretensión de resarcimiento de perjuicios prospera.

En suma, no es jurídicamente posible acceder a la indemnización de perjuicio solicitada por el Demandante que asciende a 300 SMLMV toda vez que: (i) Es exorbitante con respecto a los máximos establecidos por la Corte Suprema de Justicia, (ii) Los baremos de la corte están establecidos en montos ciertos de dinero y no en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigente, luego no es procedente solicitar una indemnización de esta forma t (iii) deberá aportarse prueba de su acreditación.

Por lo anteriormente mencionado, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, así como los pronunciamientos y manifestaciones realizadas por los sujetos intervinientes en cada uno de sus escritos, no pueden ni deben ser indemnizados por mi representada, ya que su presunta causación no se encuentra debidamente probada en ninguna de las modalidades por perjuicio extrapatrimonial, además de que, resultan abiertamente indebida e injustificada la desmesurada solicitud de perjuicios morales por suma total de 300 SMLMV (estimados en el escrito genitor en \$348.000.000), a la luz de los presupuestos configurativos que permiten estructurar el origen de este tipo de perjuicios.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

5. INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE PERMITAN ACREDITAR EL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en ninguno de los hechos relatados en el escrito de la demanda, la parte actora refiere de manera puntual y concreta, de qué forma se materializó el perjuicio “daño a la vida de relación” de las demandantes con ocasión a los hechos acontecidos el 07 de julio de 2023, es decir, no se explica de manera clara y razonada de qué forma y cuáles relaciones exteriores se vieron afectadas por el daño alegado, razón por la cual lo pretendido carece del carácter cierto y, en ese sentido, no tiene vocación de prosperidad. Además, la tasación de los perjuicios pretendidos por la demandante resulta a todas luces exorbitante de cara a los baremos establecidos por la Corte Suprema de Justicia para litigios donde se indemnizan el perjuicio pretendido.

Sea lo primer indicar que la Corte Suprema de Justicia, ha definido el daño a la vida en relación como “la afectación a la «vida exterior, a las relaciones interpersonales» producto de las secuelas que las lesiones dejaron en las condiciones de existencia de la víctima” Cabe reseñar que este tipo de daño “adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también lo

diferencia del perjuicio moral propiamente dicho”¹³.

Asimismo, la alta corte ha manifestado que el único legitimado para solicitar su indemnización es la víctima directa:

*“(…) b) Daño a la vida de relación: **Este rubro se concede únicamente a la víctima directa** del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales (...)”¹⁴.*

Ante este panorama, es evidente que se realiza en la demanda, respecto del reconocimiento del daño a la vida en relación a favor de las aquí demandantes, pues se solicita por personas que no tienen legitimidad alguna para reclamar la indemnización del referido perjuicio.

En consonancia con lo expuesto, es preciso resaltar lo indicado por el Tribunal Superior de Pereira sobre la carga que le asiste al extremo actor de identificar de manera clara la afectación que ha tenido en sus condiciones normales de vida con ocasión al hecho dañoso¹⁵:

“(…) Cuestionaron los demandados y la llamada en garantía el reconocimiento de este perjuicio, por cuanto las razones para ello fueron idénticas a la utilizadas para reconocer el lucro cesante, además que estimaron quedó sin acreditación la alteración de las condiciones del actor con ocasión de la lesión sufrida” (Folios 9-10 y 97-98, cuaderno No.10).

*Para esta Sala prospera esta alzada, pero por falta de congruencia, puesto que si bien se trata de un perjuicio reclamado (Fisiológico, folio 37, cuaderno principal), lo cierto es que ese hecho en forma alguna se argumentó en la demanda, **faltan datos indicativos de cómo se afectaron las condiciones normales de vida del actor.***

La manera en que se advertía ese perjuicio se pretermitió en el escrito introductor y ha debido serlo como garantía del derecho de defensa de los demandados y para respetar el principio de congruencia de la sentencia (Artículo 281, CGP) (...)”

En este punto, útil es recordar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia¹⁶, en un caso que negó ese

¹³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006- 1997-09327-01. M.P. Cesar Julio Valencia Copete

¹⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de junio de 2017. Radicación nº 11001- 31-03-039-2011-00108-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

¹⁵ TSDJ de Pereira. Sentencia 438 de 17-09-2019. Rad.: 05001-31-03-007-2007-00532-01. M.P. Duberney Grisales Herrera

¹⁶ CSJ. SC7824-2016.

pedimento por haberse dado esa omisión:

“(…) En efecto, al observar la demanda aducida y su reforma, integradas en un solo documento, encuentra la Corte que el actor fue quien, desde el comienzo, fusionó tanto el detrimento moral como el de vida de relación, por tanto, el ad-quem, se limitó a pronunciarse alrededor de una sola clase de detrimento; la lectura que brindó a lo expuesto por el demandante refleja, de manera fiel, la forma como se presentó y reclamó la indemnización.

*(…) Dado que se trata de detrimentos distintos, que no pueden ser confundidos, al ser reclamados debió indicarse un referente económico para cada uno de ellos, aspecto que no se hizo; además, su naturaleza, diferente a la del daño moral, comporta una **afectación proyectada a la esfera externa de la víctima, sus actividades cotidianas; relaciones con sus más cercanos, amigos, compañeros, etc.,** a diferencia de los daños morales que implican una congoja; impactan, directamente, su estado anímico, espiritual y su estabilidad emocional, lo que, sin duda, al describirse en el libelo respectivo de qué manera se exteriorizan, deben mostrarse diversos, empero, como se anunció líneas atrás, su promotor cuando expuso el factum del debate describió unas mismas circunstancias como indicadores de los dos daños.*

*“Y, si, en gracia de discusión, la Corte aceptara que en el escrito incoativo fueron pedidos de manera autónoma e independiente los daños morales y de vida de relación, habría que concluir, prontamente, que el impugnante no señaló, puntualmente, de qué forma se le generó el daño a la vida de relación, pues, como atrás se indicó, **NO HUBO SEÑALAMIENTO CONCRETO DE LA REPERCUSIÓN EN EL CÍRCULO O FRENTE A LOS VÍNCULOS DE LA ACTORA. ES MÁS, NO SE APRECIÓ O DESCRIBIÓ, EN PARTICULAR, QUÉ NEXOS O RELACIONES SE VIERON AFECTADAS, SUS CARACTERÍSTICAS O LA MAGNITUD DE TAL INCIDENCIA.** Resulta incontrovertible que toda limitación en la salud física o mental de un individuo impacta negativamente su entorno; sin embargo, ante una reclamación judicial, no puede la víctima dejar al Juez conjeturar las repercusiones concretas de esa situación perjudicial y, en el presente asunto, la afectada se despreocupó de indicar las particularidades del detrimento denunciado, luego, no es dable aseverar su existencia real, determinada y concreta.*

En suma, al ser un tema que ni siquiera se fundamentó, mal podría reconocerse, habrá de revocarse ese acápite de la sentencia (…)” (Resaltado fuera de texto).

De lo anterior se desprende que el daño a la vida en relación debe basarse en afirmaciones concretas que den muestra de cuáles son las afectaciones reales que ha sufrido la víctima en sus condiciones de

vida. Sin embargo, en este caso, la parte demandante no acredita de forma real, determinada y concreta la forma en que los procedimientos quirúrgicos practicados afectaron su manera de relacionarse o su cotidianidad.

Finalmente, ruego al Despacho tener en consideración que el extremo actor no allegó al acervo probatorio los medios pertinentes, conducentes y útiles que permiten determinar la gravedad de la afectación supuestamente padecida por las aquí demandantes y en todo caso, esta tipología de perjuicios sólo es procedente respecto a la víctima directa.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO

6. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. DEBIDO A QUE NO SE HA CUMPLIDO CON LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL ART. 1077 del C. Co.

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no ha surgido en cabeza de mi representada dado que no se demostró la realización del riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil extracontractual del asegurado porque, en primer lugar, no se demostró un nexo de causalidad entre las conductas de los demandados y el daño alegado por la demandante ante la ausencia de medios de prueba que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 07 de julio de 2022 y, por el otro, tampoco se probó la cuantía de la pérdida.

Para efectos de las solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte Demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“(…) ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad (...) (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

“(…) Es asunto averiguado que en virtud del negocio asegurativo, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”

“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (…)* Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que *“el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”*. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”

“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., Art. 1080) (…)”¹⁷ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

¹⁷ ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

(i) **La no realización del Riesgo Asegurado.**

De conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza No. AA031299, podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó, siendo necesario indicar que el objeto de la póliza es *indemnizar o reembolsar al asegurado las sumas por las cuales sea civilmente responsable*. Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró comoquiera que (i) no se encuentra acreditada la calidad de pasajero del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) y, en sentido, no es aplicable el régimen de responsabilidad civil contractual amparado por la póliza mediante la cual se vinculó a mi representada, (ii) no se encuentran acreditados los presupuestos axiales de la responsabilidad civil puesto que los medios probatorios allegados por el extremo actor carecer de virtualidad para la declaratoria de responsabilidad debido a que, por un lado, el IPAT no está debidamente diligenciado al no formular hipótesis alguna sobre la circunstancia de modo, tiempo y lugar del supuesto accidente y, por el otro, tampoco ha culminado la investigación penal adelantada con ocasión a los acontecimientos del 07 de julio de 2023, por lo tanto no se encuentra probado la existencia de un hecho dañoso y (ii) en el acervo probatorio no se observa medios que acrediten la existencia y cuantía de los perjuicios afirman padecer las aquí demandantes, tal como se precisará en líneas posteriores.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado o conductor autorizado del vehículo de placas UIE 065. Sin embargo, la parte demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de los demandados y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Por lo visto, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, es decir la responsabilidad civil contractual, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no se configuraron los presupuestos axiales para la declaratoria de la responsabilidad que se pretende endilgar a la pasiva, afirmación que encuentra sustento en la ausencia de medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles que expliquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto accidente del 07 de julio de 2023. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora.

(ii) **Acreditación de la cuantía de la pérdida.**

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios extrapatrimoniales, toda vez que la parte actora pretende el daño moral y el daño a la vida de relación

padecido tras el supuesto accidente de tránsito acontecido el 07 de julio de 2023, lo anterior sin aportar medios probatorios que permitan colegir la existencia y cuantía de la tipología de perjuicios solicitados.

Concretamente debe tenerse en cuenta frente los perjuicios morales ha de señalarse que no obra en el plenario prueba sobre congoja causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 07 de julio de 2023 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales. Por otro lado, frente al daño en la vida de relación debe iterarse que (i) es una tipología de perjuicio que se reconoce exclusivamente en favor de la víctima, por lo que las demandantes carecen de legitimada para reclamar su pago, (ii) no obra en el plenario prueba sobre alteración en la cotidianidad causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 07 de julio de 2023 y (iii) los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.

Ahora bien, no es factible afectar la póliza No. AA031299 toda vez que no se acreditó la cuantía de las pérdidas ocasionadas con el hecho del 07 de julio de 2023, lo anterior teniendo en cuenta que reconocer perjuicios que no están debidamente demostrados contraía el principio meramente indemnizatorio que reviste a los contratos de seguros.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse que la póliza no podrá ser afectada por cuanto la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, ni la cuantía de la pérdida, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por el contrario, se observa de manera evidente la completa ausencia de elementos materiales probatorios dentro del expediente que permitan endilgar responsabilidad al extremo pasivo, de acuerdo a lo reiteradamente manifestado. Además, no se probó la cuantía de la pérdida puesto que la parte demandante se limitó a indicar los supuestos perjuicios sufridos sin allegar pruebas útiles, pertinentes y conducentes para acreditar la existencia y cuantía de los mismos. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, es claro que no ha nacido la obligación condicional del asegurador.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

7. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Y LOS DEMÁS SUJETOS QUE INTEGRAN LA PARTE DEMANDADA

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia¹⁸ ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte¹⁹ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…) **La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.** De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

8. EN TODO CASO NO SE PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE ASEGURADO DE LA PÓLIZA No. AA031299 EMITIDA POR LA COMPAÑÍA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

¹⁸ Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez

¹⁹ Ibídem.

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro No. AA031299, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso, se pactó el límite asegurado por pasajero consistente en la suma de 60 SMLMV, razón por la cual ante una eventual condena mi representada no estará obligada a pagar suma superior al límite referido.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

*“(…) **ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.** El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…)”*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)”²⁰.

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza No. AA031299, se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del

²⁰ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.

carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la póliza No. AA031299 se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD	APARTADO
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
LOCALIDAD	CALLE 91 # 96A -27
DIRECCION	CALLE 91 # 96A -27
TIPO DE VEHICULO	CAMPEROS / CAMIONETAS
V/ASEGURADO POR PUESTO/PERSONA	60 SMLV
CAPACIDAD DE PASAJEROS	10.00
PLACA UNICA	UIE065
CANAL DE VENTA	Directo

Fotografía: Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. AA031299

De esta manera, se precisa que el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a la vigencia comprendida entre el 09 de enero de 2023 hasta el 09 de enero de 2024.

De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

9. SUJECIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO, PÓLIZA NO. AA031299.

Ahora bien, y continuando con la exposición de los medios exceptivos de defensa de mi representada, se ha de precisar que conforme al artículo 1044 del C.Co., la Equidad Seguros Generales O.C., podrá proponer a los beneficiarios, las excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son personas distintas, por tanto, en caso de un fallo en contra, este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro, y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de los demandantes contra la Equidad Seguros O.C., en ejercicio de la acción de reclamación directa de la víctima contra la aseguradora, tal relación deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado **SEGURO R.C. CONTRACTUAL NO. AA0031299, con vigencia desde el 09/01/2023-00 horas hasta el 09/01/2024 24:00 horas, certificado No. AB000811 orden 1015**, en la cual se encuentran contenidas las

condiciones particulares de la póliza y por las condiciones generales contenidas en la forma **30/04/2021-1501-P-03-GAUTA00006011602-D00I**.

10. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA No. AA031299 EMITIDA POR LA COMPAÑÍA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que la parte actora pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibidem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibidem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”²¹ (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

²¹ Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, dentro del cual la activa prende el reconocimiento de las siguientes sumas de dinero:

- 300 SMLMV por concepto de daño moral, los cuales son improcedentes toda vez que no obra en el plenario prueba sobre congoja causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 07 de julio de 2023 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales. En adición, tampoco se encuentra probada la Unión Marital de Hecho que se afirma existió entre la señora Anselma María Genez Delgado y el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD).
- 300 SMLMV por concepto de daño a la vida de relación, los cuales son inexistentes por cuanto, (i) es una tipología de perjuicio que se reconoce exclusivamente en favor de la víctima, por lo que las demandantes carecen de legitimada para reclamar su pago, (ii) no obra en el plenario prueba sobre alteración en la cotidianidad causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 07 de julio de 2023 y (iii) los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.

Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de la demandante. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto la parte demandante sobre los conceptos de daño moral, daño a la vida de relación, lucro cesante consolidado y futuro, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

11. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA No. AA031299 EMITIDA POR LA COMPAÑÍA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la póliza de seguro vinculada al proceso, en sus condiciones generales señalan una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la póliza de seguro No. AA031299 pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

12. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

13. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

En virtud del mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito al Despacho declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

CAPÍTULO II.

CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADOR DE URABÁ COOINTUR A EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO

FRENTE AL HECHO 1: ES CIERTO, la Cooperativa Integral de Transportadores de Urabá, COOINTUR, fue demandada en proceso verbal declarativo de Responsabilidad Civil Extracontractual del cual conoce el Juzgado Civil del Circuito de Turbo (Antioquia), bajo el radicado 05837-31-03-001-2024-00025-00; los hechos materia de litigio se centran en el accidente de tránsito ocurrido el 07 de julio de 2023 aproximadamente a las 11:30, en el sector Santa Fe Las Playas. Es de anotar que la Equidad Seguros Generales O.C., también se encuentra vinculada a dicho proceso como parte demandada.

FRENTE AL HECHO 2: ES CIERTO, para la fecha de ocurrencia del hecho vial, es decir, para el día 07 de julio de 2023, la Cooperativa Integral de Transportadores de Urabá, COOINTUR tenía contratadas dos pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil que amparaban al vehículo que se vio implicado en el lamentable suceso, las cuales son:

- Póliza No. AA012316, RCE SERVICIO PÚBLICO.
- Póliza No. AA031299, R.C. CONTRACTUAL.

Por una parte, la Póliza AA012316 RCE SERVICIO PÚBLICO, cuenta con un amparo de lesiones o muerte a una persona con un valor asegurado de 60.00 SMMLV, mientras que, la Póliza No. AA031299 R.C. CONTRACTUAL, cuenta con un valor asegurado por puesto/persona de 60 SMMLV.

FRENTE AL HECHO 3: ES CIERTO, pues, se reitera, el amparo contrato por lesiones o muerte a una persona tenía un valor máximo asegurado de 60 SMMLV, esto quiere decir que, dado que los hechos objeto de litigio ocurrieron el día 07 de julio de 2023, y que para ese año el salario mínimo era de \$1.160.000. el valor asegurado era de \$69.600.000. Es de aclarar que, el tomador de dicha póliza en efecto es la Cooperativa Integral de Transportadores de Urabá COOINTUR, y el asegurado el señor Diego Raúl Primera Santos, sin embargo, en la póliza bien se especifica que los beneficiarios son los terceros civilmente afectados, condición de la cual no gozan las señoras Anselma María Genez Delgado, Yuris Yohanna Pérez Hernández y Ketty Yojanna Pérez Hernández, pues aún no han probado la

ocurrencia del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio; es decir, no se ha demostrado la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

FRENTE AL HECHO 1: No se trata de un hecho, se trata de la transcripción e interpretación de un precepto normativo por parte del llamante en garantía.

FRENTE AL HECHO 2: No se trata de un hecho, es una observación subjetiva realizada por la parte que realiza el llamamiento en garantía. En cualquier caso, al momento de resolver sobre el fondo del asunto de la relación contractual existente entre mi representada y COOINTUR, el operador judicial deberá tener en cuenta las normas aplicables y que rigen la relación contractual no siendo estas únicamente las que dispone la ley, sino también las pactadas por las partes del contrato y que quedaron plasmadas en las condiciones particulares y generales del contrato de seguro.

FRENTE AL HECHO 3: Es cierto. Según se tiene registro, la Cooperativa Integral de Transportadores de Urabá dio aviso de la ocurrencia del siniestro a la compañía aseguradora el día 13 de julio de 2023.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO

En tanto que, a pesar de no dividir las así, el acápite de pretensiones del llamamiento en garantía trae consigo diversas pretensiones, procede a pronunciarme frente a ellas en los siguientes términos:

Frente a la pretensión de que se vincule al proceso a mi representada Equidad Seguros Generales O.C., como llamada en garantía, no hay lugar a oponerme porque incluso el despacho ya resolvió admitir el llamamiento en garantía formulado por la Cooperativa Integral de Transportadores de Urabá, y lo que es más, contra mi representada se ejerció acción directa por parte de los demandantes, por lo que se encuentra vinculada al proceso desde la primera etapa.

Me opongo a la pretensión de que se establezca en contra de mi representada como llamada en garantía la obligación de reembolsarle a la Cooperativa Integral de Transportadores de Urabá, COOINTUR, al señor Diego Raúl Primera Santos, propietario del vehículo, las sumas de dinero que por la muerte del señor Alberto Pérez Hernández, el llamante en garantía deba reconocer en favor de los demandantes, esto en tanto que en el asunto de la referencia no se vislumbra elemento probatorio alguno que permita estructurar el nexo causal entre el hecho atribuido a COOINTUR como empresa a la que estaba afiliada el vehículo de placas UIE-065, y el daño alegado por quienes integran el extremo demandante, por ende, al no verse configurado el siniestro en los términos pactados en las condiciones generales de la póliza, no ha nacido ni nacerá a la vida jurídica la obligación condicional a cargo de mi representada.

Además, debe explicarse y tenerse en cuenta algo particular, pues la vinculación como llamado en garantía de mi representado no obedece a la existencia de una sino de dos pólizas, la póliza RCE

SERVICIO PÚBLICO No. AA012316 y la póliza R.C. CONTRACTUAL No. AA031299; ahora bien, y según los hechos de la demanda, la víctima de los hechos, el señor ALBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, se movilizaba como pasajero y ocupante del vehículo de placas UIE-065 cuando ocurrió el fatal suceso, luego entonces, la póliza RCE SERVICIO PÚBLICO No. AA012316 no podría verse afectada, pues esta dentro de sus exclusiones aplicables a todas las coberturas, establece:

“1.1. EXCLUSIONES PARA TODAS LAS COBERTURAS.

¿Qué no cubre?

- *Reclamaciones derivadas directa o indirectamente de la muerte o lesiones a ocupantes o pasajeros del vehículo asegurado.*
- *Cualquier reclamación directa o indirecta promovida por el pasajero del vehículo asegurado, sus causahabientes o beneficiario legales, cuyo origen sea la muerte o lesiones a ocupantes o pasajeros del vehículo asegurado.*
- *Responsabilidad Civil amparada por la póliza de responsabilidad civil contractual de servicio público del vehículo asegurado, o que provenga de perjuicios contractuales o extracontractual causado a causahabientes, familiares o víctimas indirectas de un ocupante o pasajero del vehículo asegurado”.*

Por lo anterior, y en el eventual y remoto evento de que el operador judicial encuentre fundamento para acceder a las pretensiones de la demanda, téngase en cuenta que solo se podrá afectar la Póliza R.C. CONTRACTUAL AA031299, y para tales efectos, se deberá tener en cuenta las condiciones particulares y generales de la póliza, valor asegurado, deducible pactado, exclusiones, entre otras circunstancias propia e inherentes al carácter de consensualidad del contrato de seguro.

III. EXCEPCIONES DE MERITO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. AUSENCIA DE COBERTURA POR EXCLUSIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SEGURO, AUSENCIA DE COBERTURA POR LESIONES O MUERTE A OCUPANTES DEL VEHÍCULO ASEGURADO, PÓLIZA NO. AA0012316.

En materia de seguros, el asegurador según el Artículo 1056 del C.Co. podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente

póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (arts. 1056 y 1127 del C. de Co.), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-cause (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños.

En virtud de lo anterior, se propone la ausencia de cobertura de la póliza No. AA0012316, a la cual hace referencia el llamante en garantía en su escrito, póliza con certificado AB003048, orden 949, expedida por la agencia de Apartadó, la cual no presta cobertura para los hechos materia de litigio, pues en sus condiciones generales contenidas en la forma 30/04/2021-1501-NT-P-03-GAUTA00007000116-D001, en su numeral 1.1 se determinaron las exclusiones así:

1.1. EXCLUSIONES PARA TODAS LAS COBERTURAS

La Equidad quedará exonerada de toda responsabilidad cuando se presente una o varias de las siguientes causales:

- Reclamaciones derivadas directa o indirectamente de la muerte o lesiones a ocupantes o pasajeros del vehículo asegurado.
- Cualquier reclamación directa o indirecta promovida por el pasajero del vehículo asegurado, sus causahabientes o beneficiarios legales, cuyo origen sea la muerte o lesiones a ocupantes o pasajeros del vehículo asegurado.
- Responsabilidad civil amparada por la póliza de responsabilidad civil contractual de servicio público del vehículo asegurado, o que provenga de perjuicios contractuales o extracontractuales causados a causahabientes, familiares o víctimas indirectas de un ocupante o pasajero del vehículo asegurado.

En atención a lo indicado y de acuerdo con el relato de los hechos y a la documentación allegada al proceso, es claro que el señor Alberto Pérez Hernández (Q.E.P.D.), se transportaba como pasajero del vehículo de placas UIE-065, en ejecución de un contrato de transporte.

Así las cosas, es claro entonces que los hechos y pretensiones materia de litigio están excluidos de cobertura, y por tanto la póliza No. AA0012316, vinculada al proceso a través del llamamiento en garantía, no podrá ser afectada y deberá ser desvinculada, pues se reafirma, no presta cobertura para los hechos materia de discusión.

Como prueba de lo anterior, señor Juez, téngase de presente la copia de la póliza y el clausulado que se allegan junto con el presente líbello de contestación.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

2. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. DEBIDO A QUE NO REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO.

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no ha surgido en cabeza de mi representada obligación alguna para con el llamante en garantía, dado que no se demostró la realización del riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil extracontractual del asegurado porque no se demostró un nexo de causalidad entre las conductas de los demandados y el daño alegado por la parte demandante, ante la ausencia de medios de prueba que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 07 de julio de 2022.

El artículo 1072 del Código de Comercio define como siniestro:

“ARTÍCULO 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.” – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En línea con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia²² ha reiterado que para que exista la obligación de indemnizar a cargo de la compañía aseguradora, derivada del contrato de seguro, es requisito indispensable la realización del riesgo asegurado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1072 del Código de Comercio, dado que sin daño o sin detrimento patrimonial no puede operar el contrato:

Una de las características de este tipo de seguro es «la materialización de un perjuicio de stirpe económico radicado en cabeza del asegurado, sin el cual no puede pretenderse que el riesgo materia del acuerdo de voluntades haya tenido lugar y, por ende, que se genere responsabilidad contractual del asegurador. No en vano, en ellos campea con vigor el principio indemnizatorio, de tanta relevancia en la relación asegurativa».

Así las cosas, el cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

²² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de diciembre de 2017. SC20950-2017. Radicación 05001-31-03-005-2008-00497-01.

“(…) Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”

“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (…)* Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”

“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., Art. 1080) (…)”²³ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se ha

²³ ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

probado este factor, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

En particular, es necesario tener en cuenta que, de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza No. AA031299, podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó, siendo necesario indicar que el objeto de la póliza es *indemnizar o reembolsar al asegurado las sumas por las cuales sea civilmente responsable*. Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró comoquiera que (i) no se encuentra acreditada la calidad de pasajero del señor Alberto Pérez Hernández (QEPD) y, en ese sentido, no es aplicable el régimen de responsabilidad civil contractual amparado por la póliza mediante la cual se vinculó a mi representada, (ii) no se encuentran acreditados los presupuestos axiales de la responsabilidad civil puesto que los medios probatorios allegados por el extremo actor carecen de virtualidad para la declaratoria de responsabilidad debido a que, por un lado, el IPAT no está debidamente diligenciado al no formular hipótesis alguna sobre la circunstancia de modo, tiempo y lugar del supuesto accidente y, por el otro, tampoco ha culminado la investigación penal adelantada con ocasión a los acontecimientos del 07 de julio de 2023, por lo tanto no se encuentra probado la existencia de un hecho dañoso y (ii) en el acervo probatorio no se observan medios que acrediten la existencia y cuantía de los perjuicios afirman padecer las aquí demandantes, tal como se precisará en líneas posteriores.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado o conductor autorizado del vehículo de placas UIE-065. Sin embargo, la parte demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de los demandados y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Por lo visto, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, es decir la responsabilidad civil contractual, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no se configuraron los presupuestos axiales para la declaratoria de la responsabilidad que se pretende endilgar a la pasiva, afirmación que encuentra sustento en la ausencia de medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles que expliquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto accidente del 07 de julio de 2023. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

3. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Y EL LLAMANTE EN GARANTÍA.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia²⁴ ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte²⁵ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…) **La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.** De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

²⁴ Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez

²⁵ Ibídem.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

4. EN TODO CASO NO SE PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE ASEGURADO DE LA PÓLIZA No. AA031299 EMITIDA POR LA COMPAÑÍA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro No. AA031299, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso, se pactó el límite asegurado por pasajero consistente en la suma de 60 SMLMV, razón por la cual ante una eventual condena mi representada no estará obligada a pagar suma superior al límite referido.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

*“(...) **ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.** El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (...)”*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“(...) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (...)”²⁶.

²⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza No. AA031299, se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la póliza No. AA031299 se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD	APARTADO
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
LOCALIDAD	CALLE 91 # 96A -27
DIRECCION	CALLE 91 # 96A -27
TIPO DE VEHICULO	CAMPEROS / CAMIONETAS
V/ASEGURADO POR PUESTO/PERSONA	60 SMMLV
CAPACIDAD DE PASAJEROS	10.00
PLACA UNICA	UIE065
CANAL DE VENTA	Directo

Fotografía: Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. AA031299

De esta manera, se precisa que el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a la vigencia comprendida entre el 09 de enero de 2023 hasta el 09 de enero de 2024.

De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

5. SUJECIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO.

Ahora bien, y continuando con la exposición de los medios exceptivos de defensa de mi representada frente al llamamiento en garantía, se ha de precisar que conforme al artículo 1044 del C.Co., la Equidad Seguros Generales O.C., podrá proponer a los beneficiarios, las excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son persona distinta, por tanto, en caso de un fallo contra este deberá ajustar de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro, y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de los demandantes contra el llamante en garantía, la Equidad Seguros O.C., en ejercicio de la acción de reclamación directa de la víctima contra la aseguradora, tal relación deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado **SEGURO R.C. CONTRACTUAL NO. AA0031299, con vigencia desde el 09/01/2023-00 horas hasta el 09/01/2024 24:00 horas, certificado No. AB000811 orden 1015**, en la cual se encuentran contenidas las condiciones particulares de la póliza y por las condiciones generales contenidas en la forma **30/04/2021-1501-P-03-GAUTA00006011602-D00I**.

Ahora bien, si bien es cierto con el llamamiento en garantía también se vinculó la Póliza RCE SERVICIO PUBL NO. AA012316 con vigencia entre el 09/01/2023 24 horas hasta el 09/01/2024 24 horas, certificado No. AB003048 orden 949, según ya se explicó líneas atrás, esta póliza no podría ser afectada en tanto que, los hechos materia de litigio no contaría con cobertura material según lo previsto en las condiciones generales contenidas en la forma 30/04/2021-1501-P-03-GAUTA00007000116-D00I, se configura una de las exclusiones pactadas, es decir, uno de aquellos eventos en los cuales la Equidad queda exonerada de toda responsabilidad.

6. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA No. AA031299 EMITIDA POR LA COMPAÑÍA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO.

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que la parte actora pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibidem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibidem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de

*seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)*²⁷ (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibidem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, dentro del cual la activa prende el reconocimiento de las siguientes sumas de dinero:

- 300 SMLMV por concepto de daño moral, los cuales son improcedentes toda vez que no obra en el plenario prueba sobre congoja causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 07 de julio de 2023 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales. En adición, tampoco se encuentra probada la Unión Marital de Hecho que se afirma existió entre la señora Anselma María Genez Delgado y el señor Alberto Pérez Hernández (QEPD).
- 300 SMLMV por concepto de daño a la vida de relación, los cuales son inexistentes por cuanto, (i) es una tipología de perjuicio que se reconoce exclusivamente en favor de la víctima, por lo que las demandantes carecen de legitimada para reclamar su pago, (ii) no obra en el plenario prueba sobre alteración en la cotidianidad causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 07 de julio de 2023 y (iii) los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.

Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de la demandante. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

²⁷ Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto la parte demandante sobre los conceptos de daño moral, daño a la vida de relación, lucro cesante consolidado y futuro, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

7. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA No. AA031299 EMITIDA POR LA COMPAÑÍA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la póliza de seguro vinculada al proceso, en sus condiciones generales señalan una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la póliza de seguro No. AA031299 pues las partes

acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

8. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

9. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

En virtud del mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito al Despacho declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

IV. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE

a. Ratificación de testimonios extrajuicio

El Art. 262 del C.G.P., preceptúa que: *“(...) Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite. Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior. (...)”*.

Entonces, cabe resaltar que el Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los testimonios cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo; y en tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor probatorio a la declaración extrajuicio allegada con el escrito de demanda que se relaciona a continuación y, en su lugar, se sirva de citar a quienes suscribieron dicho documento:

1. Declaración extrajuicio rendida en la Notaría Única del Círculo de Aboletes (Antioquia) por los señores Miguel Enrique Argumedo Carvajal y Diomedes Dionicio Díaz Berrío

V. MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

1. DOCUMENTALES

- Copia del Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. AA031299
- Clausulado general No. 30/04/2021-1501-NT- P-03-GAUTA00006011602 aplicable a la póliza No. AA031299
- Copia de la Póliza RCE Servicio Público No. AA012316
- Clausulado general No. 30/04/2021-1501-P-03-GAUTA00007000116-D00I, aplicable a la Póliza No. AA012316.

2. INTERROGATORIO DE PARTE

- a. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la demandante ANSELMA MARÍA GENEZ DELGADO, YURIS YOHANNA PÉREZ HERNÁNDEZ Y KETTY YOJANNA PÉREZ HERNÁNDEZ, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandante podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- b. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor LUIS ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ en su calidad de representante legal de COOINTUR, o quien haga sus veces, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en su contestación.
- c. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor DIEGO RAÚL PRIMERA SANTOS en su calidad de conductor del vehículo de placas UIE 065, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en su contestación.

3. DECLARACIÓN DE PARTE.

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, ausencias de cobertura, exclusiones, términos y condiciones de los contratos de seguro Póliza Seguro vinculada.

4. TESTIMONIALES.

Solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de la Dra. **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, quien tiene domicilio en la ciudad de Popayán y puede ser citada en la Carrera 32 bis No. 4 16 Popayán y correo electrónico darlingmarcela1@gmail.com para que declare sobre las condiciones generales y particulares de la Póliza Seguro No. AA031299, y sobre las condiciones generales y particulares de la Póliza No. AA0012316 RCE SERVICIO PÚBLICO, los límites pactados, los deducibles concertados, las exclusiones, los amparos concertados, la disponibilidad de las sumas aseguradas, las solicitudes presentadas ante la compañía, sus respuestas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial, y en general sobre lo referido en las excepciones propuestas en este escrito.

5. DICTAMEN PERICIAL.

Comedidamente anuncio que me valdré de un informe de reconstrucción de accidente de tránsito a fin de ofrecer al despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo.

El medio de prueba anunciado es conducente, pertinente y útil, por cuanto pretende ilustrar al despacho, de forma técnica y científica, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 07 de julio de 2023.

Dicha prueba pericial se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código General del Proceso, pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo, además, el término de traslado no fue suficiente para elaborar y aportar el dictamen pericial

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos (2) meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior término se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Juez proceder de conformidad.

6. INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

VI. ANEXOS

- Documentos relacionados en el acápite de pruebas.

VII. NOTIFICACIONES

Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda. Por los demás demandados, donde indiquen en sus respectivas contestaciones.

A mí representada, LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. en la dirección de notificación judicial para la ciudad de Bogotá, en la Carrera 9 A No. 99 – 7. E-mail: notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop.

Por parte del suscrito se recibirán notificaciones en la Secretaría de su despacho o en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.